

**LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades, Asunción, Paraguay**

ISSN en línea: 2789-3855, 2026

Paradojas de gobernabilidad y autoritarismo: aceptación de un gobierno militar en México

Paradoxes of governance and authoritarianism: acceptance of a
military government in Mexico

Mario Antonio Ramírez Barajas

mario.barajas@anahuac.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8750-2913>

Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac
Norte

Ciudad de México – México

Alejandro Mújica

alejandromujica@politicas.unam.mx

<https://orcid.org/0009-0006-7977-5782>

Centro Internacional de Estudios
Estratégicos (sede México). Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública,
UNAM

Ciudad de México – México

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5775>

Artículo recibido: 26 de diciembre de 2025.

Aceptado para publicación: 29 de abril de 2026.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.


Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos


LATAM

Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades

VOLUMEN VII

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5775>

Paradojas de gobernabilidad y autoritarismo: aceptación de un gobierno militar en México

Paradoxes of governance and authoritarianism: acceptance of a military government in Mexico

Mario Antonio Ramírez Barajas

mario.barajas@anahuac.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8750-2913>

Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac Norte

Ciudad de México – México

Alejandro Mújica

alejandromujica@politicas.unam.mx

<https://orcid.org/0009-0006-7977-5782>

Centro Internacional de Estudios Estratégicos (sede México). Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM

Ciudad de México – México

Artículo recibido: 26 de diciembre de 2025. Aceptado para publicación: 29 de abril de 2026.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

México enfrenta una paradoja política de relevancia para el análisis de la gobernabilidad democrática: mientras indicadores recientes muestran niveles históricamente elevados de satisfacción con la democracia y apoyo normativo al régimen democrático, también se registra un crecimiento sostenido en la disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en contextos de crisis. El objetivo del artículo es analizar la coexistencia entre el apoyo normativo a la democracia y dicha disposición en México, identificando los factores asociados al fenómeno y examinando sus implicaciones para la gobernabilidad democrática, la violencia y los derechos humanos. Se adopta un diseño no experimental, transversal y descriptivo, basado en el análisis de fuentes secundarias: datos de Latinobarómetro para el periodo 2004–2024, encuestas nacionales publicadas en medios especializados y documentos institucionales sobre la militarización del Estado mexicano. Los resultados muestran que la aceptación de un gobierno militar aumentó de 14.4 % en 2004 a 42.9 % en 2023, impulsada por la desconfianza hacia las instituciones civiles, la persistente crisis de seguridad y la transferencia progresiva de funciones civiles a las fuerzas armadas. La evidencia indica que dicha militarización no se ha traducido en mejoras sostenidas en los indicadores de violencia, sino que se asocia con mayores tasas de homicidio y vulneraciones a los derechos humanos. Se concluye que la paradoja mexicana no refleja una ciudadanía antidemocrática, sino un desfase creciente entre expectativas democráticas y desempeño institucional, con implicaciones significativas para el Estado de derecho.

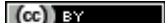
Palabras clave: democracia, militarización, gobernabilidad, seguridad pública, autoritarismo

Abstract

Mexico faces a politically relevant paradox for the analysis of democratic governance: while recent indicators show historically high levels of satisfaction with democracy and normative support for the democratic regime, there has also been a sustained increase in citizens' willingness to accept a

military government in times of crisis. The article aims to analyze the coexistence between normative support for democracy and the growing willingness to accept a military government in Mexico, identifying the factors associated with this phenomenon and examining its implications for democratic governance, violence, and human rights. A non-experimental, cross-sectional, and descriptive design is adopted, based on the analysis of secondary sources: Latinobarómetro data for the 2004–2024 period, national surveys published in specialized media, and institutional documents on the militarization of the Mexican state. The results show that acceptance of a military government increased from 14.4% in 2004 to 42.9% in 2023, driven by distrust toward civilian institutions, the persistent security crisis, and the progressive transfer of civilian functions to the armed forces. Available evidence indicates that this militarization has not translated into sustained improvements in violence indicators; rather, it is associated with higher homicide rates and human rights violations. It is concluded that the Mexican paradox does not reflect an anti-democratic citizenry, but rather a growing gap between democratic expectations and institutional performance, with significant implications for the rule of law.

Keywords: democracy, militarization, governance, public security, authoritarianism

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons. 

Cómo citar: Ramírez Barajas, M. A., & Mújica, A. (2026). Paradojas de gobernabilidad y autoritarismo: aceptación de un gobierno militar en México. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 7 (2), 1932 – 1952. <https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5775>

INTRODUCCIÓN

Contexto y Justificación

El debate sobre la consolidación democrática en México ha adquirido en los últimos años un carácter marcadamente paradójico. A diferencia de los diagnósticos que durante décadas subrayaron el escepticismo ciudadano hacia la democracia y sus instituciones, diversos indicadores recientes sugieren una recuperación significativa en la valoración pública del régimen democrático. En 2024, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia alcanzó 50 %, el nivel más alto desde el inicio de la serie en 1995 (Latinobarómetro, 2024). De manera paralela, el apoyo normativo a la democracia – esto es, la convicción de que, aun con sus deficiencias, constituye la mejor forma de gobierno – se situó en 74 %, también en niveles históricamente elevados (Latinobarómetro, 2024).

Este dato es relevante desde una perspectiva teórica. Como ha señalado la literatura clásica sobre apoyo político, el respaldo ciudadano a la democracia no es unívoco, sino que puede distinguirse entre un apoyo normativo o difuso, basado en valores y principios, y un apoyo instrumental o específico, vinculado a la evaluación concreta del desempeño del régimen y de sus autoridades (Easton, 1975; Norris, 2011). La coexistencia de altos niveles de adhesión normativa con evaluaciones críticas del funcionamiento democrático no constituye una anomalía en sí misma; sin embargo, introduce tensiones analíticamente relevantes para la estabilidad institucional cuando el desencanto con los resultados se profundiza y abre espacio a alternativas no democráticas.

Otros indicadores refuerzan esta lectura ambivalente. Entre 2023 y 2024, la proporción de personas que consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno aumentó de 35 % a 49 %, mientras que el respaldo explícito a un régimen autoritario descendió de 33 % a 24 % (Latinobarómetro, 2024). Asimismo, la confianza en el gobierno federal se incrementó de manera notable, al pasar de 16 % en 2018 a 52 % en 2024 (Latinobarómetro, 2024). La confianza en las fuerzas armadas, por su parte, se mantuvo en 52 %, aunque mostró una ligera disminución respecto al año previo (Latinobarómetro, 2024). En conjunto, estos indicadores sugieren una recomposición parcial de la legitimidad institucional en un país que históricamente ha mostrado elevados niveles de desconfianza hacia los partidos políticos, los congresos y las policías civiles.

La contribución de este artículo consiste en mostrar que, en el caso mexicano, la aceptación contingente de un gobierno militar no debe entenderse únicamente como rechazo a la democracia, sino como una forma de legitimidad democrática condicionada por el desempeño estatal, la desconfianza institucional y la normalización del papel de las fuerzas armadas en funciones civiles.

METODOLOGÍA

Enfoque de Investigación

El estudio adopta un enfoque analítico de carácter empírico, basado en el análisis descriptivo de datos secundarios provenientes de fuentes públicas, medios especializados en análisis de opinión pública, y documentos institucionales. No se realiza recolección de datos de campo propia; en su lugar, la investigación se apoya en información existente, seleccionada y triangulada con criterios de confiabilidad, pertinencia y actualidad, conforme a prácticas aceptadas en estudios de opinión pública y análisis de políticas públicas.

El diseño de la investigación es no experimental, transversal y descriptivo; por tanto, los resultados se interpretan como asociaciones consistentes entre variables y no como relaciones causales demostradas.

Diseño del Estudio

En primer lugar, se analizan datos de encuestas de opinión pública para examinar la evolución de las actitudes ciudadanas hacia la democracia, el autoritarismo y la aceptación de un gobierno militar en México. La fuente principal es Latinobarómetro, considerando las series disponibles para el periodo 2004–2023, así como los resultados correspondientes a 2024 (Latinobarómetro, 2023; Latinobarómetro, 2024). Estos datos permiten examinar tendencias temporales y situar el caso mexicano en un contexto regional comparado.

De manera complementaria, se utilizan encuestas nacionales publicadas por El Financiero para profundizar en indicadores específicos de satisfacción con la democracia, apoyo normativo al régimen democrático y niveles de confianza institucional (Moreno, 2025a; Moreno, 2025b).

En segundo lugar, se realiza un análisis documental de informes especializados y documentos institucionales relacionados con la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles. Entre estas fuentes destaca el Inventario Nacional de lo Militarizado, elaborado por el Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta (PPD, MUCD & Intersecta, 2024), así como información estadística producida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre violencia, homicidios y seguridad pública. Este análisis permite contextualizar los datos de opinión pública y examinar los efectos reportados y documentados de las políticas de militarización del Estado mexicano.

La estrategia metodológica se basa en la triangulación de fuentes cuantitativas y documentales, con el fin de robustecer la evidencia y reducir sesgos derivados del uso de una sola fuente de información.

Si bien el estudio no busca establecer relaciones causales estrictas, sí pretende identificar asociaciones consistentes entre militarización, desconfianza institucional y aceptación de soluciones autoritarias, así como discutir sus implicaciones para la gobernabilidad democrática. En consecuencia, los resultados se interpretan como asociaciones empíricas consistentes y no como relaciones causales demostradas.

Los alcances del análisis se limitan a la interpretación de percepciones ciudadanas y a la revisión de evidencia secundaria, por lo que las conclusiones se formulan explícitamente dentro de estos márgenes analíticos.

Criterios de Selección de Fuentes y Límites de Comparabilidad

La selección de las fuentes utilizadas en este estudio se realizó con base en tres criterios principales: (a) continuidad temporal de las mediciones, que permitiera observar tendencias de largo plazo; (b) reconocimiento académico e institucional de las fuentes, particularmente en el ámbito de los estudios comparados de opinión pública y seguridad; y (c) disponibilidad pública y transparencia metodológica de los datos.

En este sentido, Latinobarómetro constituye la fuente central para el análisis de actitudes ciudadanas hacia la democracia y el autoritarismo, mientras que los informes de organizaciones especializadas y datos oficiales se emplean para contextualizar institucionalmente dichas percepciones.

En cuanto a la comparabilidad, el análisis se limita a indicadores que mantienen definiciones conceptuales estables a lo largo del tiempo, lo que permite identificar variaciones interanuales sin asumir equivalencias estrictas entre contextos políticos distintos. Se reconoce, no obstante, que los cambios en el entorno político, institucional y de seguridad pueden incidir en la interpretación de las respuestas ciudadanas, por lo que los resultados deben leerse como asociaciones descriptivas y no como relaciones causales.

Finalmente, el estudio asume como límite metodológico el uso exclusivo de datos secundarios y de percepción, lo cual impide evaluar directamente comportamientos efectivos o impactos causales de las políticas de militarización. No obstante, este enfoque resulta pertinente para el objetivo del artículo, centrado en analizar las tensiones entre legitimidad democrática, confianza institucional y aceptación social de alternativas autoritarias en el México contemporáneo.

Operacionalización de la Aceptación de un Gobierno Militar

En este estudio, la variable "aceptación de un gobierno militar" se operacionaliza a partir del ítem de Latinobarómetro que indaga si, en determinadas circunstancias, los ciudadanos considerarían aceptable un gobierno encabezado por militares. Este indicador no mide una preferencia autoritaria estable ni una adhesión normativa al autoritarismo, sino una disposición contingente, activada en contextos de crisis o insatisfacción con el desempeño del régimen civil.

En consecuencia, la aceptación de un gobierno militar se interpreta aquí como una expresión de apoyo condicional o instrumental, coherente con la literatura que distingue entre respaldo normativo a la democracia y evaluaciones pragmáticas sobre su funcionamiento efectivo.

Este estudio presenta algunas limitaciones. Su diseño no experimental y basado en fuentes secundarias no permite establecer relaciones causales concluyentes entre militarización, desconfianza institucional y aceptación de alternativas autoritarias. Asimismo, la comparación entre indicadores de opinión pública y procesos institucionales debe leerse en clave analítica y contextual, más que como correspondencia lineal entre variables. En ese sentido, los hallazgos se interpretan como asociaciones consistentes y no como pruebas definitivas de causalidad.

Tabla 1

Dimensiones analíticas, indicadores, fuentes, periodos y uso analítico del estudio

Dimensión	Indicador	Fuente	Periodo	Uso analítico
Apoyo normativo	"La democracia es preferible"	Latinobarómetro	2004–2024	Tendencia longitudinal
Aceptación autoritaria	Aceptación de un gobierno militar	Latinobarómetro	2004–2023	Variable principal
Confianza institucional	Gobierno, Fuerzas Armadas, Congreso, Poder Judicial y policía	Latinobarómetro	2018–2024	Comparación institucional
Militarización estatal	Transferencia de funciones civiles a las Fuerzas Armadas	Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta	2006–2024	Contextualización estructural
Seguridad	Violencia, homicidios y percepción de inseguridad	INEGI y fuentes especializadas	Según disponibilidad	Contraste de eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (2004–2024), Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (diversos años), y Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta (2024). La tabla sintetiza las dimensiones analíticas empleadas en el estudio, así como los indicadores y fuentes utilizados para examinar la relación entre apoyo

democrático, aceptación de soluciones autoritarias, confianza institucional, militarización estatal y seguridad pública.

DESARROLLO

No obstante, esta aparente recuperación democrática convive con un fenómeno que matiza cualquier lectura lineal u optimista de los datos. A lo largo de las últimas dos décadas, el apoyo potencial a un gobierno militar ha crecido de manera sostenida en México. Un análisis de los datos de Latinobarómetro muestra que la proporción de personas dispuestas a aceptar un gobierno castrense cuando "las cosas se ponen difíciles" aumentó de 14.4 % en 2004 a 42.9 % en 2023, lo que representa un incremento cercano al 200 % (Mújica, 2024; Latinobarómetro, 2023). En términos absolutos, esta cifra equivale a casi 39.5 millones de personas adultas. De forma paralela, el porcentaje de ciudadanos que nunca apoyaría un gobierno militar se redujo a 50.4 % en 2023, lo que evidencia una erosión significativa del rechazo social a este tipo de alternativas.

Desde la literatura comparada, este patrón ha sido conceptualizado como una forma de autoritarismo contingente o autoritarismo bajo condiciones. Diversos estudios han documentado que amplios sectores de la ciudadanía pueden mantener una adhesión declarativa a la democracia y, al mismo tiempo, estar dispuestos a suspender de manera temporal frente a crisis percibidas como externas, particularmente en contextos de inseguridad, violencia o colapso institucional (Bratton & Mattes, 2001; Foa & Mounk, 2016; Levitsky & Ziblatt, 2018; Mounk, 2018). En estos casos, la preferencia por soluciones autoritarias no expresa necesariamente una ideología antidemocrática consolidada, sino una evaluación pragmática del desempeño estatal y de la capacidad de las instituciones civiles para garantizar orden, seguridad y bienestar.

En el caso mexicano, diversos estudios sugieren que esta disposición se ve reforzada por la alta valoración social de las fuerzas armadas, el deterioro crónico de la legitimidad de las instituciones democráticas civiles y la percepción persistente de incapacidad del Estado para contener fenómenos como el crimen organizado, la corrupción y la impunidad (Schedler, 2015; Trejo & Ley, 2020; Mújica, 2024). Las fuerzas armadas suelen ser percibidas como instituciones disciplinadas, eficaces y relativamente ajenas a los vicios frecuentemente atribuidos a los partidos políticos, los gobiernos locales y las corporaciones policiales, lo que contribuye a su legitimación simbólica como garantes de orden y estabilidad.

Este contraste da lugar a lo que en este trabajo se denomina "paradojas de gobernabilidad": la coexistencia de avances en el apoyo normativo a la democracia con una creciente aceptación de soluciones autoritarias, particularmente de carácter militar. La paradoja adquiere un significado especial en el contexto mexicano, dado que el país no ha experimentado dictaduras militares en su historia reciente y ha sostenido, al menos formalmente, un principio de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Sin embargo, como han documentado diversos análisis, la expansión progresiva del papel militar en tareas de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles ha contribuido a hacer más frecuente su presencia en la vida pública y a reforzar su centralidad dentro de la arquitectura del Estado (Ríos, 2021; Programa de Política de Drogas [PPD], México Unido Contra la Delincuencia [MUCD] & Intersecta, 2024).

A partir de este escenario, el presente artículo se propone analizar cómo coexisten la revalorización de la democracia y la creciente disposición a aceptar un gobierno militar, así como examinar las implicaciones de esta tensión para la gobernabilidad democrática en México. Con base en datos de percepción ciudadana provenientes de Latinobarómetro y encuestas nacionales, se explora el papel de la militarización del Estado —entendida como la transferencia de funciones civiles a las fuerzas armadas— como un factor estructural que alimenta la tentación autoritaria. El objetivo es contribuir a una comprensión más precisa de los riesgos que enfrenta la democracia mexicana en un contexto de

crisis prolongada y analizar las posibles consecuencias institucionales y normativas de una eventual expansión del poder militar más allá de los límites constitucionales.

Este estudio no evalúa a las Fuerzas Armadas como institución, sino los efectos institucionales y políticos asociados a su creciente participación en funciones tradicionalmente civiles.

Problema de Investigación

El aumento sostenido en la disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en México constituye un problema relevante para el análisis de la gobernabilidad democrática, particularmente cuando en dicho fenómeno coexisten indicadores que sugieren una revalorización del régimen democrático. En contextos comparados, la aceptación de salidas autoritarias suele asociarse con crisis profundas de legitimidad democrática; sin embargo, el caso mexicano presenta una configuración más compleja, en la que el respaldo normativo a la democracia persiste al mismo tiempo que se amplía la tolerancia hacia soluciones de fuerza. Esta coexistencia plantea interrogantes sustantivas sobre los límites del apoyo democrático y sobre las condiciones bajo las cuales dicho apoyo se vuelve contingente.

Desde una perspectiva analítica, el problema se articula en torno a la tensión entre el apoyo normativo a la democracia, entendido como adhesión a sus principios y valores, y el apoyo instrumental, vinculado a la evaluación del desempeño de las instituciones civiles para producir bienes públicos fundamentales como seguridad, justicia y orden. Esta distinción resulta clave para comprender por qué una valoración positiva de la democracia como régimen puede coexistir con una creciente tolerancia hacia soluciones autoritarias en contextos de crisis.

La literatura ha mostrado que, cuando el apoyo instrumental se erosiona de manera sostenida, los compromisos democráticos pueden adquirir un carácter más condicional, abriendo espacio a la aceptación de alternativas autoritarias que prometen eficacia inmediata, aun cuando estas impliquen potenciales riesgos para el Estado de derecho (Easton, 1975; Norris, 2011; Foa & Mounk, 2016; Claassen, 2020).

En el caso mexicano, esta tensión se ve reforzada por la expansión progresiva del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles. Diversos estudios han documentado que la militarización de la seguridad, lejos de resolver de manera estructural los problemas de violencia e inseguridad, tiende a hacer más frecuente la presencia castrense en la vida pública y a reforzar su legitimidad simbólica frente al descrédito de otras instituciones estatales (Trejo & Ley, 2020; Ríos, 2021; PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

La aceptación de un gobierno militar no necesariamente expresa una ruptura ideológica con la democracia, sino una evaluación pragmática del desempeño del Estado y de la eficacia percibida de sus actores.

Objetivos y Preguntas de Investigación

Pregunta de investigación

- ¿Qué factores ayudan a comprender que, en México, el aumento del apoyo normativo a la democracia coexista con una mayor disposición a aceptar un gobierno militar en contextos de crisis?

Objetivo del artículo

- Analizar la coexistencia entre el apoyo normativo a la democracia y la creciente disposición a aceptar un gobierno militar en México, identificando los factores asociados a este fenómeno y examinando sus posibles implicaciones para la gobernabilidad democrática, la violencia y los

derechos humanos, a partir de datos de percepción ciudadana y del debate teórico contemporáneo sobre legitimidad democrática y autoritarismo contingente.

Hipótesis

Se plantea que la militarización de la seguridad pública, en combinación con la desconfianza institucional y la persistente crisis de inseguridad, se asocia con una menor legitimidad percibida de las instituciones civiles y con una mayor disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en contextos de crisis. En este sentido, se sostiene que la presencia extendida de militares en funciones civiles puede alimentar una tentación autoritaria de carácter contingente, al reforzar la percepción de las fuerzas armadas como actores eficaces y legítimos frente al descrédito de otras instituciones estatales.

Sin embargo, dicha expansión no se ha traducido de manera consistente en una mejora sostenida de las condiciones de seguridad, sino que ha tendido a asociarse con mayores niveles de violencia, debilitamiento institucional y vulneraciones a los derechos humanos, como lo documentan diversos estudios sobre la militarización y la violencia en México (Trejo & Ley, 2020; Ríos, 2021; Programa de Política de Drogas [PPD], México Unido Contra la Delincuencia [MUCD] & Intersecta, 2024).

Teorías y Modelos

El análisis de la relación entre democracia, gobernabilidad y aceptación de soluciones autoritarias ha ocupado un lugar central en la literatura de la ciencia política comparada durante las últimas décadas. Lejos de concebir el apoyo ciudadano a la democracia como una actitud homogénea y estable, diversos enfoques han subrayado su carácter multidimensional y contingente, particularmente en contextos de crisis institucional persistente. Este marco resulta particularmente útil para comprender la paradoja que atraviesa el caso mexicano, donde la revalorización declarativa de la democracia convive con una creciente disposición a aceptar gobiernos de carácter militar.

Uno de los aportes fundamentales para abordar esta tensión proviene de la distinción clásica entre apoyo normativo (o difuso) y apoyo instrumental (o específico) al sistema político. Desde la formulación original de Easton (1975), se reconoce que los ciudadanos pueden sostener un compromiso abstracto con los valores democráticos al mismo tiempo que expresan insatisfacción con el desempeño concreto de las instituciones y autoridades. Estudios posteriores han desarrollado esta distinción para mostrar que el apoyo normativo suele ser más estable, mientras que el apoyo instrumental es altamente sensible a resultados económicos, niveles de seguridad y percepciones de eficacia gubernamental (Norris, 2011).

Esta diferenciación resulta particularmente relevante en América Latina, una región caracterizada por transiciones democráticas incompletas, instituciones frágiles y altos niveles de desigualdad social. Bratton y Mattes (2001) demostraron que, en contextos de desempeño institucional deficiente, el respaldo ciudadano a la democracia tiende a adquirir un carácter eminentemente instrumental: la democracia es valorada en la medida en que produce resultados tangibles. Cuando dichos resultados no se materializan, el compromiso con el régimen se debilita, aun cuando persista una adhesión discursiva a sus principios (véase también Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013; Booth & Seligson, 2009).

Conceptos Clave

En esta línea, diversos estudios recientes han identificado un fenómeno que desafía las concepciones tradicionales de la estabilidad democrática: la aceptación de formas de autoritarismo contingente o autoritarismo bajo condiciones. Foa y Mounk (2016) documentan que amplios sectores de la ciudadanía en democracias formales están dispuestos a tolerar, e incluso a apoyar, restricciones temporales a la democracia si estas prometen resolver crisis percibidas como extremas. Este tipo de

actitudes no implica necesariamente una ruptura ideológica con la democracia, sino una posible jerarquización pragmática de prioridades, donde el orden, la seguridad o la eficacia gubernamental pueden imponerse sobre los procedimientos democráticos (véase también Mounk, 2018; Levitsky & Ziblatt, 2018).

La literatura sobre legitimidad democrática ha subrayado que este tipo de disposiciones se intensifican en contextos donde el Estado enfrenta dificultades persistentes para garantizar bienes públicos fundamentales. Schedler (2015) sostiene que la incertidumbre política y la incapacidad institucional generan escenarios propicios para la erosión de los compromisos democráticos, aun sin la presencia de actores abiertamente antidemocráticos. En estos contextos, la ciudadanía no abandona necesariamente la democracia como ideal, pero sí comienza a considerar alternativas excepcionales como respuestas funcionales a crisis prolongadas (véase también O'Donnell, 1994; Diamond, 2015; Lührmann & Lindberg, 2019).

El papel de las fuerzas armadas en este proceso ha sido objeto de un creciente debate académico, especialmente en América Latina. Históricamente, los ejércitos de la región han desempeñado un rol ambivalente: actores centrales en la construcción del Estado y, en ciertos contextos históricos, participantes en interrupciones autoritarias del orden democrático. Aunque México se distingue por no haber experimentado dictaduras militares durante el siglo XX, diversos estudios coinciden en que la legitimidad social del Ejército mexicano ha sido consistentemente superior a la de otras instituciones estatales, en particular frente a policías civiles, partidos políticos y gobiernos locales (Ríos, 2021).

En años recientes, este capital simbólico se ha visto reforzado por la expansión del rol militar en tareas de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles. Investigaciones sobre la militarización del Estado han documentado cómo la transferencia de atribuciones administrativas, de seguridad e incluso económicas a las fuerzas armadas contribuye a redefinir su posición dentro del sistema político, desplazando a actores civiles y reconfigurando los equilibrios institucionales (Trejo & Ley, 2020; PPD, MUCD & Intersecta, 2024). Este proceso no solo tiene implicaciones operativas, sino también normativas, al modificar las expectativas ciudadanas sobre qué tipo de actores deben garantizar el orden y la gobernabilidad.

Desde esta perspectiva, la creciente aceptación de un gobierno militar en México puede interpretarse como el resultado de la interacción entre un alto apoyo normativo a la democracia y un debilitamiento sostenido del apoyo instrumental a sus instituciones civiles. La paradoja no reside en una contradicción lógica, sino en una tensión estructural: la democracia es valorada como principio, pero cuestionada como mecanismo eficaz para resolver problemas urgentes. En este escenario, las fuerzas armadas emergen como una alternativa percibida como simbólicamente legítima y funcionalmente atractiva, aun cuando su protagonismo implique riesgos significativos para el Estado de derecho y la subordinación civil.

Este marco teórico permite situar el caso mexicano dentro de un debate comparado más amplio sobre los límites de la gobernabilidad democrática en contextos de crisis prolongada. Asimismo, ofrece las herramientas conceptuales necesarias para interpretar los datos empíricos analizados en las secciones siguientes, particularmente en lo relativo a la coexistencia entre apoyo democrático y tolerancia al autoritarismo. Lejos de tratarse de una anomalía coyuntural, las paradojas de gobernabilidad observadas en México reflejan tensiones profundas que atraviesan a las democracias contemporáneas y que exigen ser analizadas con rigor teórico y evidencia empírica.

RESULTADOS

Evolución de la percepción ciudadana

Satisfacción y apoyo a la democracia

Los indicadores de Latinobarómetro permiten contextualizar la evolución reciente de la opinión pública en México, particularmente en lo que respecta a la relación entre el respaldo normativo al régimen democrático y la evaluación instrumental del desempeño institucional.

En 2024, el país se ubicó entre los valores más elevados de la región en satisfacción con el funcionamiento de la democracia, alcanzando 50 %, lo que lo colocó en el tercer lugar latinoamericano, solo por detrás de Uruguay y El Salvador (Latinobarómetro, 2024). Este resultado representa el valor más alto registrado para México desde que la medición comenzó en 1995.

En la misma línea, el apoyo normativo a la democracia —medido a partir del acuerdo con la afirmación de que "la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno"— alcanzó 74 % en 2024, uno de los niveles más elevados de la serie histórica (Latinobarómetro, 2024).

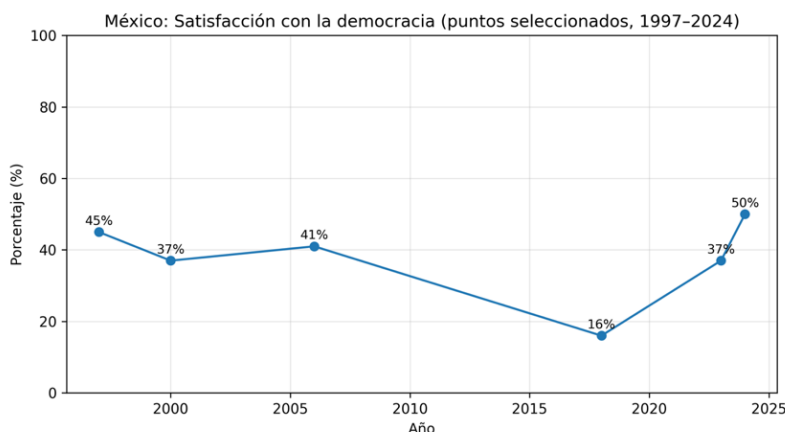
Asimismo, la confianza en el gobierno federal se incrementó de forma significativa en términos cuantitativos, al pasar de 16 % en 2018 a 52 % en 2024, ubicando a México en el segundo lugar regional, junto con República Dominicana (Latinobarómetro, 2024).

No obstante, el comportamiento de la confianza institucional presenta importantes contrastes. Mientras que la confianza en las fuerzas armadas se mantuvo en 52 % en 2024, la confianza en la policía fue considerablemente menor, situándose en 28 %, y la confianza en los partidos políticos, aunque mostró un incremento (de 9 % en 2017 a 30 % en 2024), permanece muy por debajo de los niveles observados en la década de 1990 (Latinobarómetro, 2024).

Estas diferencias pueden interpretarse como indicativas de una revalorización selectiva de la autoridad estatal, en la que ciertas instituciones —en particular las militares— concentran mayores niveles de legitimidad relativa frente a otras instancias civiles.

Gráfico 1

Satisfacción con la democracia (1997–2024)



Nota: La serie se construyó principalmente con datos de Latinobarómetro; la prensa especializada se utilizó exclusivamente para corroborar o reportar resultados de levantamientos recientes cuando la base consolidada aún no estaba disponible en formato armonizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (1995–2024) y prensa especializada.

El análisis comparado interanual permite contextualizar la magnitud de estas tendencias. Entre 2023 y 2024, México registró uno de los mayores incrementos regionales en el apoyo a la democracia, con un aumento de 14 puntos porcentuales en la proporción de personas que consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (Latinobarómetro, 2024). De manera paralela, se observó una reducción en la aceptación general de un régimen autoritario, que descendió de 33 % a 24 % en el mismo periodo. Si bien este indicador difiere de la pregunta específica sobre la aceptación de un "gobierno militar" (que había alcanzado su máximo histórico de 42.9 % en 2023), la tendencia a la baja en la predisposición autoritaria sugiere una descompresión relevante en la demanda de salidas no democráticas.

Este repunte democrático coincide temporalmente con el proceso electoral presidencial de 2024; sin embargo, el alcance de esta coincidencia no permite establecer relaciones causales, y debe ser interpretado como un elemento contextual en la evolución reciente de las actitudes ciudadanas.

Como resultado de este cambio, México dejó de ocupar la posición de país con mayor inclinación autoritaria en la región, condición que había registrado en 2023 (Latinobarómetro, 2024). Sin embargo, como se analizará en las siguientes secciones, esta recuperación del apoyo democrático convive con persistentes brechas de confianza hacia instituciones civiles clave, lo que constituye uno de los elementos centrales de las paradojas de gobernabilidad examinadas en este estudio.

Factores de la creciente aceptación del autoritarismo

Desconfianza institucional y crisis de seguridad

El deterioro de la legitimidad de las instituciones civiles se ha señalado en la literatura como un factor asociado a la creciente disposición ciudadana a aceptar soluciones autoritarias. Aunque en años recientes se ha registrado un aumento en la confianza hacia el gobierno federal y las fuerzas armadas, persisten diferencias sustantivas de legitimidad entre estas instituciones y otros actores clave del sistema democrático. En 2024, la confianza en la policía se mantuvo en 28 %, uno de los niveles más

bajos entre las instituciones evaluadas, en contraste con el 52 % de confianza registrado tanto para el gobierno federal como para las fuerzas armadas (Latinobarómetro, 2024).

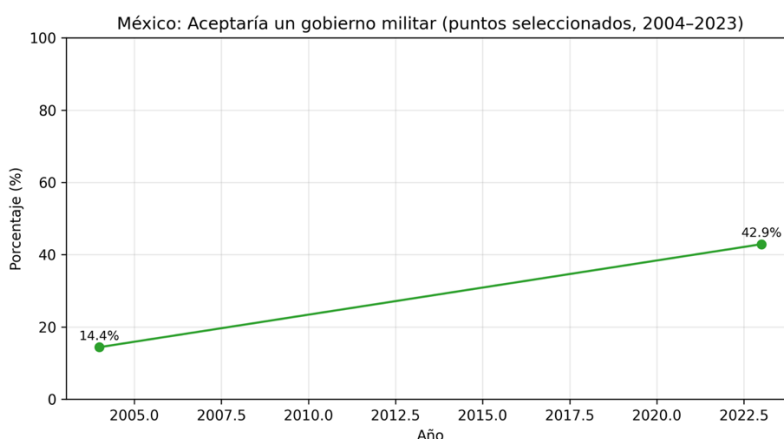
Esta asimetría institucional es consistente con percepciones ciudadanas de larga duración. Diversos estudios indican que una parte significativa de la población tiende a identificar a las policías civiles como corruptas, ineficaces y vulnerables a la captura criminal, mientras que atribuye al Ejército y a la Marina disciplina, profesionalismo y capacidad operativa. Las fuerzas armadas se han mantenido, durante décadas, en los primeros lugares de los rankings de confianza institucional, por encima del Congreso, los partidos políticos y el Poder Judicial (Mújica, 2024; Latinobarómetro, 2024).

En efecto, los datos de Latinobarómetro indican que en 2024 32 % de los mexicanos expresó confianza en el Congreso de la Unión y 35 % en el Poder Judicial, porcentajes inferiores a los observados para las instituciones militares (Latinobarómetro, 2024).

Esta disparidad puede interpretarse como indicativa de un déficit estructural de legitimidad de las instituciones civiles de representación y justicia, y como un contexto en el que se ha ampliado la aceptación social de la expansión del papel militar en tareas de seguridad pública, así como de la percepción de que los militares podrían desempeñar funciones de gobierno con mayor eficacia que los civiles.

Gráfico 2

Aceptación de un gobierno militar (2004–2023)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (2004–2023) y Mújica (2024).

La persistencia de altos niveles de violencia y la presencia del crimen organizado agravan este proceso de erosión institucional. El sexenio de Felipe Calderón, 2006–2012, marcó el inicio de una estrategia de militarización de la seguridad pública —frecuentemente denominada "guerra contra el narcotráfico"— cuyas consecuencias se han prolongado en el tiempo. Desde entonces, México ha experimentado un aumento sostenido de homicidios y desapariciones, así como una presencia cada vez más visible de las fuerzas armadas en funciones policiales, sin que se observe una reducción estructural de la violencia en el mismo periodo (Trejo & Ley, 2020; Ríos, 2021).

La percepción de inseguridad se ha identificado como un factor asociado a la disposición ciudadana a aceptar políticas de seguridad de carácter restrictivo, incluso cuando estas implican limitaciones a derechos y garantías democráticas.

La aceptación social de medidas como la creación de la Guardia Nacional y el despliegue permanente de soldados en tareas de seguridad interna se ha visto acompañada por evaluaciones negativas del

desempeño de las policías locales y estatales. En este sentido, la crisis de seguridad conlleva un debilitamiento de la legitimidad de las instituciones civiles y con un contexto en el que se amplía la tolerancia hacia salidas autoritarias presentadas como respuestas frente a la violencia.

Militarización del Estado y normalización del rol castrense

La militarización institucional del Estado puede entenderse como un proceso sostenido de transferencia de competencias, recursos y funciones originalmente civiles hacia las fuerzas armadas, mediante instrumentos legales, administrativos y presupuestales. Este fenómeno no se limita al ámbito de la seguridad pública, sino que implica una reconfiguración de la arquitectura del Estado y de los equilibrios entre autoridades civiles y militares.

El Inventario Nacional de lo Militarizado documenta que, entre 2006 y 2023, los tres niveles de gobierno realizaron al menos 291 transferencias formales de funciones y presupuestos hacia las fuerzas armadas, a través de reformas constitucionales, leyes secundarias, decretos ejecutivos y convenios administrativos (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

De acuerdo con este inventario, la mayoría de estas transferencias se concentró durante el periodo 2018–2024 y se llevó a cabo, en gran medida, mediante convenios específicos y mecanismos administrativos, con una limitada deliberación pública. Un dato relevante es que 83 % de los convenios federales firmados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se destinaron a funciones no directamente vinculadas con la seguridad pública incluyendo la ejecución de programas sociales, tareas de protección ambiental, control aduanero y la construcción y operación de obras de infraestructura estratégica (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

Este patrón puede interpretarse como un desplazamiento estructural de competencias civiles hacia las fuerzas armadas, con implicaciones para el alcance del mandato constitucional tradicional y para la capacidad operativa y simbólica de las instituciones civiles.

En el ámbito legislativo, el proceso de militarización también ha mostrado avances relevantes. El inventario identifica 87 iniciativas legislativas orientadas a ampliar las facultades de las fuerzas armadas, de las cuales 77 % fueron presentadas en las dos legislaturas más recientes y 46 % provinieron del partido gobernante (Morena). Aunque solo 16 % de estas iniciativas han sido aprobadas –incluyendo dos reformas constitucionales y doce leyes secundarias–, su proliferación es indicativa de una mayor recurrencia al recurso militar como solución institucional, incluso cuando muchas de estas propuestas no prosperan formalmente (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

A ello se suma el uso intensivo de decretos ejecutivos como vía para ampliar el papel de las fuerzas armadas. Entre 2018 y 2023, el Ejecutivo federal emitió 19 decretos para la creación de empresas administradas por militares y la asignación directa de proyectos estratégicos, entre los que destacan el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Asimismo, entre 2007 y 2022 se firmaron 258 convenios de transferencia: 222 transfirieron funciones acompañadas de presupuesto, 8 transfirieron exclusivamente funciones y 28 transfirieron únicamente recursos financieros (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

Este entramado normativo y administrativo es indicativo de una presencia militar ampliada en diversas áreas de la gestión pública.

Desde una perspectiva político-institucional, este proceso plantea implicaciones relevantes para la gobernabilidad democrática. Como ha señalado Mújica (2024), la expansión sostenida del papel de las fuerzas armadas en funciones civiles puede incidir tanto en el diseño del Estado como en las percepciones ciudadanas sobre quién puede gobernar con eficacia. En contextos de desconfianza

hacia las instituciones civiles, la presencia permanente de las fuerzas armadas en tareas de gobierno favorece procesos de legitimación simbólica de la idea de un gobierno militar, aun sin una ruptura explícita con el orden democrático.

De este modo, la militarización puede analizarse como un proceso que amplía el horizonte de soluciones políticas consideradas legítimas en contextos de crisis persistentes, incluyendo aquellas de carácter excepcional o coercitivo.

Finalmente, el Inventario Nacional de lo Militarizado señala que este proceso plantea tensiones con principios constitucionales, se vincula con menores niveles de transparencia y rendición de cuentas, y correlaciona con mayores niveles de violencia y una menor calidad democrática (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

En este sentido, la militarización del Estado puede analizarse no solo como una respuesta transitoria o excepcional, sino como un proceso con efectos de carácter estructural en el régimen político, lo que contribuye a las paradojas de gobernabilidad que enfrenta la democracia mexicana.

Militarización de las policías locales

La militarización del aparato de seguridad no se circunscribe al ámbito federal, sino que también se manifiesta en los niveles estatal y municipal, dando lugar a un proceso de militarización territorializada que incide en la lógica de operación de las policías locales. Diversos estudios han documentado que este fenómeno no es reciente ni marginal, y que ha estado presente a lo largo de los últimos tres sexenios en contextos caracterizados por crisis de seguridad y debilidades institucionales de las corporaciones civiles.

Padilla Oñate (2024) señala que, durante el sexenio de Felipe Calderón, 2006–2012, 16 de las 32 entidades federativas nombraron a secretarios de seguridad pública con antecedentes castrenses, lo que implica que la mitad de las policías estatales estuvieron encabezadas por militares o marinos en ese periodo. Si bien en los gobiernos posteriores se registraron fluctuaciones en el número de nombramientos de este tipo, la presencia de personal militar en la conducción de las policías estatales se ha mantenido en niveles relevantes: al menos un tercio de estas corporaciones han sido dirigidas por mandos con antecedentes castrenses en los últimos tres sexenios, lo que es consistente con una mayor recurrencia al liderazgo militar en instituciones diseñadas originalmente para operar bajo mando civil.

La evidencia más reciente es consistente con la persistencia de esta tendencia. De acuerdo con un informe de México Evalúa, en 2024 47 % de las policías estatales estaban encabezadas por miembros activos o retirados de las fuerzas armadas (México Evalúa, 2024). Este patrón es indicativo de una mayor presencia de perfiles militares en la conducción de corporaciones policiales estatales, y ha sido acompañado por preocupaciones en materia de derechos humanos, particularmente por el aumento de la presencia de oficiales de la Marina al frente de corporaciones estatales, fuerza que ha sido señalada en diversos informes por su participación en operativos caracterizados por elevados niveles de uso de la fuerza (México Evalúa, 2024).

En el ámbito municipal, aunque la información sistemática es más fragmentaria, la evidencia disponible apunta en la misma dirección. Zarkin (2023) estima que entre los años 2000 y 2020 al menos 841 militares ocuparon cargos de dirección en la seguridad pública municipal. Este fenómeno no parece distribuirse de manera aleatoria, sino que responde a dinámicas de difusión institucional: la probabilidad de que un municipio designe a un militar como jefe de policía aumenta 60 % cuando las demarcaciones vecinas ya cuentan con mandos militares, y 130 % cuando la secretaría estatal de

seguridad está encabezada por un militar. Estas dinámicas son consistentes con la existencia de efectos de imitación y presión regional, que acompañan la expansión de la militarización "desde abajo".

La militarización local no se limita a los puestos de mando, sino que también se expresa en la composición de las fuerzas operativas. El Censo Nacional de Seguridad Pública 2024 reporta la presencia de 1 898 exsoldados y 326 exmarinos integrados en las policías estatales del país. La distribución de este personal presenta una concentración significativa: cuatro entidades federativas concentran 66 % de los exsoldados, mientras que Quintana Roo reúne 71.5 % de los exmarinos incorporados a corporaciones policiales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2024). Estas cifras son consistentes con la presencia de procesos de militarización de las policías locales tanto en los niveles directivos como en la base operativa, con posibles efectos sobre la cultura organizacional, los métodos de intervención y las relaciones con la ciudadanía.

En conjunto, estos procesos derivan en una menor diferenciación entre la seguridad pública y la lógica militar, debilitando el carácter civil de las policías locales y reforzando la percepción de que el control del orden depende crecientemente de actores armados con formación castrense. Como se ha argumentado en secciones previas, esta transformación institucional no solo tiene efectos operativos, sino también consecuencias políticas y simbólicas, al ampliar el espacio de legitimidad simbólica de la conducción militar como una opción considerada en contextos de crisis de seguridad, incluso en ámbitos tradicionalmente reservados al gobierno civil.

Implicaciones: violencia y derechos humanos

La expansión sostenida de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha demostrado tener, en diversos estudios, efectos adversos en términos de violencia y protección de los derechos humanos. Diversos estudios empíricos indican que la militarización no se ha traducido en una mejora estructural de la seguridad y que tiende a asociarse con incrementos en los niveles de homicidio y con tensiones en las capacidades institucionales civiles (Dell, 2015; Osorio, 2015; Calderón et al., 2015). El informe La otra militarización, elaborado por México Evalúa, documenta que las entidades federativas que cuentan con secretarios de seguridad provenientes de las fuerzas armadas presentan tasas de homicidio más elevadas, tanto en el caso de hombres como de mujeres, en comparación con aquellas dirigidas por mandos civiles (México Evalúa, 2024).

Un elemento adicional identificado por dicho informe es la alta rotación de los titulares militares al frente de las secretarías estatales de seguridad, quienes permanecen en el cargo, en promedio, poco más de dos años. Esta inestabilidad en los puestos de mando tiende a generar desorden organizacional, dificulta la consolidación de estrategias de seguridad de mediano plazo y puede contribuir a dinámicas de escalamiento de la violencia, particularmente en contextos donde las corporaciones policiales ya presentan debilidades estructurales. La militarización se ha traducido a lógicas de intervención de corto plazo que plantean desafíos para la continuidad institucional y la gobernanza del sector (México Evalúa, 2024).

Asimismo, la evidencia disponible sugiere la existencia de tensiones entre los procesos de militarización y la protección de los derechos humanos. El mismo informe señala que la incorporación de integrantes de la Marina a las secretarías estatales de seguridad coincide con una mayor incidencia de violaciones a derechos humanos en detenciones, particularmente en el uso excesivo de la fuerza y en la ausencia de controles civiles efectivos (México Evalúa, 2024). Esta evidencia es consistente con análisis previos que señalan que las fuerzas armadas, cuya formación, doctrina y marcos normativos responden prioritariamente a lógicas de defensa nacional, enfrentan dificultades estructurales para el desempeño de tareas propias de la seguridad ciudadana, lo que incrementa el riesgo de abusos.

Las transferencias de funciones civiles hacia las fuerzas armadas también tienen implicaciones más amplias para la calidad democrática y el Estado de derecho. El régimen jurídico-militar opera bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas distintos a los que rigen a las instituciones civiles, los cuales, en la práctica, pueden resultar menos accesibles para el escrutinio público. La participación de las fuerzas armadas en actividades económicas estratégicas, como la construcción de infraestructura, la administración de aduanas y la gestión de empresas públicas, introduce incentivos corporativos que amplían los márgenes de discrecionalidad en la gestión pública y plantean desafíos adicionales para los mecanismos de control democrático sobre el uso de recursos públicos (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

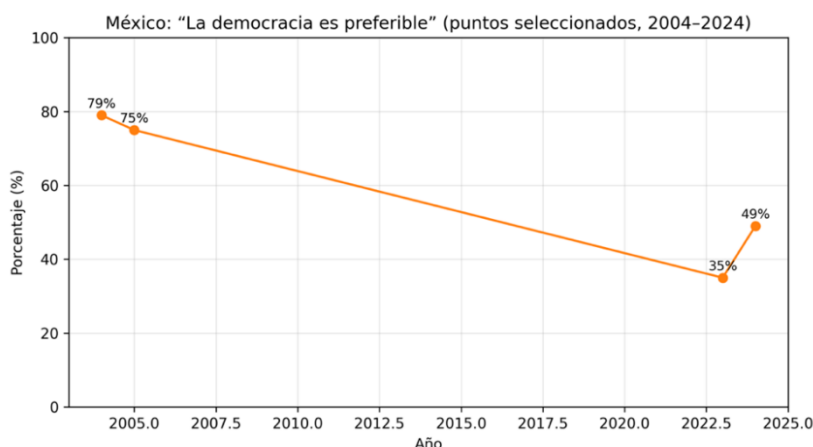
Adicionalmente, la militarización evidencia efectos regresivos en términos de diversidad y perspectiva de género dentro de las instituciones de seguridad. El desplazamiento de perfiles civiles, incluidas mujeres y especialistas con formación en seguridad ciudadana, de los puestos directivos tiende a reducir la pluralidad de enfoques y a limitar la incorporación de perspectivas orientadas a la prevención, la proximidad social y el respeto a los derechos humanos.

En conjunto, la evidencia comparada sugiere la existencia de una correlación negativa entre la militarización y la calidad democrática: a medida que las fuerzas armadas concentran mayor presencia en ámbitos políticos y económicos, se manifiestan tensiones crecientes en el equilibrio entre poderes, las libertades civiles y los mecanismos de control democrático (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).

Cabe señalar que, desde la narrativa oficial, la ampliación del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido presentada como una respuesta necesaria y pragmática frente a la debilidad histórica de las policías civiles y a la magnitud de la violencia vinculada al crimen organizado. Bajo este enfoque, la participación militar se justifica en términos de capacidad operativa, disciplina institucional y cobertura territorial, así como por su carácter supuestamente transitorio mientras se fortalecen las instituciones civiles. No obstante, la evidencia empírica revisada en este estudio sugiere que, más allá de estas justificaciones, la militarización ha tendido a consolidarse como un rasgo estructural del aparato de seguridad, sin que ello se traduzca en mejoras sostenidas en los indicadores de violencia ni en un fortalecimiento del control civil y la rendición de cuentas.

Gráfico 3

"La democracia es preferible" (2004–2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (1995–2024) y prensa especializada.

DISCUSIÓN

La evidencia empírica y documental analizada permite demostrar la paradoja planteada en este estudio: en México coexisten avances relevantes en el apoyo normativo a la democracia con una creciente apertura hacia alternativas autoritarias. Los resultados son consistentes con la hipótesis propuesta, en la medida en que muestran que factores como la desconfianza persistente en las instituciones civiles, la crisis de seguridad y la militarización progresiva del Estado impulsan un incremento en la aceptación social de la idea de un gobierno militar, incluso en un contexto en el que mejoran ciertos indicadores de satisfacción democrática.

Sin embargo, el descenso registrado en 2024 en la disposición hacia alternativas autoritarias (que bajó al 24 %) merece una lectura matizada. Lejos de indicar un rechazo a la figura castrense, este dato podría reflejar una integración simbólica: al ser las fuerzas armadas actores centrales y visibles del actual proyecto de gobierno, el cual goza de altos niveles de aprobación, la ciudadanía podría no percibir la necesidad de una ruptura o "golpe de timón" autoritario externo. En otras palabras, la ansiedad por una intervención militar disminuye porque el estamento militar ya es percibido como parte integral y funcional del orden gobernante, transfiriéndose así la popularidad presidencial a la estructura militarizada del Estado.

Esta coexistencia no constituye una contradicción lógica, sino una configuración observable de apoyos democráticos condicionados. La ciudadanía expresa una valoración positiva de la democracia como principio normativo, pero tiende a evaluar su legitimidad efectiva en función de su capacidad percibida para producir seguridad, orden y bienestar. En este marco, la elevada confianza social en las fuerzas armadas y la percepción de su eficacia operativa, en contraste con el descrédito que enfrentan las policías civiles, los partidos políticos y otras instituciones de representación, contribuyen a que la opción de un mando castrense resulte políticamente imaginable y, en determinados contextos de crisis, socialmente tolerable.

No obstante, los datos también muestran que la expansión del rol militar en la seguridad pública no se ha traducido en una reducción sostenida de la violencia. Por el contrario, la evidencia disponible indica mayores niveles de homicidio, inestabilidad organizacional y violaciones a los derechos humanos en contextos donde las fuerzas armadas asumen funciones policiales. Este patrón cuestiona la eficacia del enfoque militarizado y pone de relieve sus costos institucionales y democráticos, sobre todo para rendir cuentas, control civil y proteger derechos fundamentales. En este sentido, los resultados son consistentes con advertencias formuladas desde hace más de una década sobre los riesgos estructurales de militarizar la seguridad pública como respuesta a problemas complejos de violencia y criminalidad (Alvarado, 2009; Benítez Manaut, 2009).

Desde una perspectiva de gobernabilidad democrática, este análisis permite identificar la existencia de tensiones relevantes para la estabilidad del régimen democrático en México si no se atienden las causas subyacentes de la insatisfacción ciudadana. La normalización del papel de las fuerzas armadas en ámbitos civiles, combinada con la persistente debilidad de las instituciones civiles de seguridad y justicia, configura un escenario en el que la aceptación de soluciones de fuerza tiende a dejar de ser excepcional y se vuelve políticamente imaginable en determinados contextos. En este marco, la paradoja mexicana no remite a una ciudadanía abiertamente antidemocrática, sino a un desfase creciente entre expectativas democráticas y resultados institucionales, que incide negativamente en la legitimidad del gobierno civil.

Si bien Latinobarómetro permite observar tendencias interanuales, el análisis reconoce límites de comparabilidad derivados de cambios contextuales, coyunturas políticas y eventos electorales. En particular, el repunte observado en 2024 coincide con el proceso electoral presidencial, lo cual puede haber influido en las percepciones ciudadanas sobre la democracia y el régimen político. Por ello, los

resultados no se interpretan como efectos causales directos, sino como asociaciones descriptivas sensibles al contexto, útiles para identificar tensiones estructurales entre apoyo democrático y aceptación contingente de soluciones autoritarias.

Implicaciones institucionales y líneas de fortalecimiento democrático

A partir del análisis desarrollado, es posible identificar un conjunto de implicaciones institucionales y líneas de acción que, de acuerdo con la evidencia revisada, podrían contribuir a reducir la aceptación social de soluciones autoritarias y a fortalecer simultáneamente la gobernabilidad democrática y la seguridad pública, sin menoscabar los principios del Estado de derecho ni la protección de los derechos humanos.

Primacía de las instituciones civiles. La evidencia analizada sugiere que el fortalecimiento del control civil sobre las funciones de seguridad constituye un elemento central para contener la normalización de la participación militar en ámbitos civiles. En este sentido, la delimitación constitucional y legal de la participación de las fuerzas armadas, asegurando que sea excepcional, temporal y sujeta a supervisión legislativa y a mecanismos de control autónomos, aparece como una condición relevante para preservar el equilibrio institucional.

Fortalecimiento de las policías civiles. Los datos indican que la persistente debilidad de las corporaciones policiales civiles contribuye a legitimar soluciones militarizadas. De ello se desprende la importancia de invertir de manera sostenida en procesos de profesionalización, certificación, formación especializada y mejora de condiciones laborales, así como en mecanismos de supervisión interna y externa orientados a la rendición de cuentas y al respeto de los derechos humanos.

Estado de derecho y rendición de cuentas. El análisis demuestra que la corrupción y la impunidad erosionan la legitimidad de las instituciones civiles y alimentan la demanda social de soluciones de fuerza. En consecuencia, el fortalecimiento de fiscalías y tribunales autónomos, dotados de capacidades efectivas para investigar y sancionar ilícitos cometidos tanto por autoridades civiles como por integrantes de las fuerzas armadas, emerge como un componente clave para recomponer la confianza ciudadana.

Transparencia de los procesos de militarización. La revisión documental muestra que buena parte de la expansión del papel militar se ha producido mediante instrumentos administrativos de baja visibilidad. La publicación íntegra de convenios y decretos, así como su sometimiento a control legislativo y escrutinio público, aparece como una condición necesaria para evaluar su pertinencia y efectos desde una perspectiva democrática.

Educación cívica y participación ciudadana. Los resultados sugieren que la aceptación de alternativas autoritarias no responde necesariamente a un rechazo de la democracia como principio, sino a la frustración frente a su desempeño institucional. En este sentido, el fortalecimiento de la educación cívica y de mecanismos de participación ciudadana puede contribuir a reconstruir el vínculo entre ciudadanía e instituciones, y a reducir la tolerancia social hacia soluciones de fuerza.

Evaluación de las políticas de seguridad basada en evidencia. Finalmente, el análisis pone de relieve la necesidad de que las decisiones en materia de seguridad se sustenten en evaluaciones empíricas rigurosas e independientes. El uso sistemático de información proveniente de fuentes como el Inventario Nacional de lo Militarizado y de investigaciones de organizaciones especializadas permite valorar los efectos reales de la militarización en la violencia, la corrupción y los derechos humanos, y constituye un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas compatibles con los principios democráticos.

CONCLUSIÓN

El caso mexicano muestra que el respaldo ciudadano a la democracia y a sus instituciones puede coexistir con una creciente aceptación de alternativas autoritarias, sin que ello implique necesariamente una ruptura abierta con el ideal democrático. Esta paradoja no responde a una deriva antidemocrática explícita, sino a la convergencia de una ciudadanía que valora la eficacia, la disciplina y el orden, una percepción persistente de inseguridad y corrupción, y una estrategia institucional que ha ampliado progresivamente el papel de las fuerzas armadas en funciones del Estado. Los datos de opinión pública indican avances relevantes en la satisfacción democrática y en el apoyo normativo a la democracia, pero también evidencian que la disposición a aceptar soluciones autoritarias persiste, aun cuando en 2024 se haya registrado un descenso coyuntural en la preferencia por un gobierno militar.

El análisis realizado indica que las distintas formas de militarización examinadas, la transferencia de funciones civiles a las fuerzas armadas, la expansión de su presencia en ámbitos económicos y administrativos, y la incorporación de mandos castrenses en las policías estatales y municipales, han contribuido a normalizar el papel militar en la vida pública. Este proceso ha incidido tanto en el diseño institucional del Estado como en las percepciones ciudadanas sobre quién puede gobernar con eficacia. No obstante, la evidencia empírica revisada sugiere que dicha militarización no ha propiciado una reducción sostenida de la violencia ni un fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; por el contrario, tiende a vincularse con mayores tasas de homicidio, inestabilidad institucional y un incremento de las violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, la paradoja mexicana no radica en una ciudadanía que rechaza la democracia, sino en un desfase creciente entre expectativas democráticas y desempeño institucional, que incide negativamente en la legitimidad del gobierno civil y hace políticamente imaginable una salida autoritaria bajo condiciones de crisis. Si esta brecha persiste, la aceptación social de soluciones de fuerza tiende a dejar de ser excepcional y puede convertirse en una alternativa recurrente, con implicaciones significativas para el Estado de derecho.

El análisis sugiere que el fortalecimiento de las instituciones civiles, la reconstrucción de la capacidad del Estado para garantizar seguridad con apego a la legalidad y el restablecimiento de mecanismos efectivos de control democrático sobre la actuación de las fuerzas armadas constituyen factores centrales para contener escenarios de regresión autoritaria.

En este marco, la consolidación de una democracia efectiva en México no depende únicamente del respaldo normativo de la ciudadanía, sino también de la capacidad institucional para responder a los problemas de seguridad, violencia y corrupción sin comprometer los principios democráticos ni la protección de los derechos fundamentales.

El riesgo para la democracia mexicana no es el rechazo ciudadano al régimen democrático, sino la normalización silenciosa de soluciones de fuerza cuando el gobierno civil no cumple.

REFERENCIAS

- Alvarado Mendoza, E. (2009). La policía, los militares, el sistema de seguridad pública y la administración de la coacción: México frente a América Latina. *El Cotidiano*, 24(153), 63–72.
- Benítez Manaut, R. (2009). La crisis de seguridad en México. *Nueva Sociedad*, 220, 173–189.
- Booth, J. A., & Seligson, M. A. (2009). *The legitimacy puzzle in Latin America: Political support and democracy in eight nations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511800856>
- Bratton, M., & Mattes, R. (2001). Support for democracy in Africa: Intrinsic or instrumental? *British Journal of Political Science*, 31(3), 447–474. <https://doi.org/10.1017/S0007123401000175>
- Calderón, G., Robles, G., Díaz-Cayeros, A., & Magaloni, B. (2015). The beheading of criminal organizations and the dynamics of violence in Mexico. *Journal of Conflict Resolution*, 59(8), 1455–1485. <https://doi.org/10.1177/0022002715587053>
- Claassen, C. (2020). Does public support help democracy survive? *American Journal of Political Science*, 64(1), 118–134. <https://doi.org/10.1111/ajps.12452>
- Dell, M. (2015). Trafficking networks and the Mexican drug war. *American Economic Review*, 105(6), 1738–1779. <https://doi.org/10.1257/aer.20121637>
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>
- Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The democratic disconnect. *Journal of Democracy*, 27(3), 5–17. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0049>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Censo nacional de seguridad pública estatal y municipal 2024. INEGI. <https://www.inegi.org.mx>
- Latinobarómetro. (2023). Informe Latinobarómetro 2023. <https://www.latinobarometro.org>
- Latinobarómetro. (2024). Informe Latinobarómetro 2024. <https://www.latinobarometro.org>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2013). *Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence, survival, and fall*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139047845>
- México Evalúa. (2024). La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011–2024. <https://www.mexicoevalua.org/la-otra-militarizacion/>
- Moreno, A. (2025a, 14 de enero). Aumenta en México la confianza en el gobierno: Encuesta Latinobarómetro. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/01/14/aumenta-en-mexico-confianza-en-el-gobierno-encuesta-lb/>

- Moreno, A. (2025b, 13 de enero). Satisfacción con la democracia rompe récord en México. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/01/13/satisfaccion-con-la-democracia-rompe-record-en-mexico-encuesta-lb/>
- Mounk, Y. (2018). *The people vs. democracy: Why our freedom is in danger and how to save it*. Harvard University Press.
- Mújica, A. (2024, 13 de febrero). Los apoyos a un gobierno militar: México 2004–2023. *InPerfecto*. <https://inperfecto.com.mx/2024/02/13/los-apoyos-a-un-gobierno-militar-mexico-2004-2023/>
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>
- O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010>
- Osorio, J. (2015). The contagion of drug violence: Spatiotemporal dynamics of the Mexican war on drugs. *Journal of Conflict Resolution*, 59(8), 1403–1432. <https://doi.org/10.1177/0022002715587048>
- Padilla Oñate, S. (2024, 2 de diciembre). Cuando los militares llegan a las policías. *Global Thought MX*. <https://www.globalthoughtmx.com/news-2/cuando-los-militares-llegan-a-las-policias>
- Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) & Intersecta. (2024). *Inventario nacional de lo militarizado en México (2006–2023)*. Ciudad de México: Programa de Política de Drogas. <https://ppd.cide.edu/inventario-nacional-de-lo-militarizado/>
- Ríos, V. (2021). Why did Mexico become so violent? *Journal of Conflict Resolution*, 65(1), 1–27. <https://doi.org/10.1177/0022002720937365>
- Schedler, A. (2015). *The politics of uncertainty: Sustaining and subverting electoral authoritarianism*. Oxford University Press.
- Trejo, G., & Ley, S. (2020). *Votes, drugs, and violence: The political logic of criminal wars in Mexico*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108779640>
- Zarkin, J. (2023). The silent militarization: Explaining the logic of military members' appointment as police chiefs. *Comparative Politics*, 55(4), 549–572. <https://doi.org/10.5129/001041523X16728595163094>

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 